

Prensa Obrera

POR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
30 de enero
de 2020

Año XXXVII
N° 1.580

\$40
www.po.org.ar
www.prensaobrero.com
prensaobrerapo@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial

Todos los caminos
conducen al FMI



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA

PACTAN

EL RESCATE DE LA DEUDA

DEFENDAMOS LAS JUBILACIONES, EL SALARIO Y LAS PARITARIAS



El conjunto de los bloques políticos del Congreso aprobó la ley que respalda la reestructuración de la deuda con el extranjero.

Sólo los diputados del Frente de Izquierda votaron contra esta ley de sometimiento al FMI, a los banqueros y a los especuladores.

Sin grietas, Sergio Massa, Máximo Kirchner, radicales, macristas, lavagnistas y Elisa Carrió otorgaron a los tribunales de Nueva York el poder de resolver frente a cualquier litigio.

A su vez, los gobernadores depusieron todos sus reclamos a cambio de una "mesa de trabajo". Esto a pesar de que la situación en las provincias se agrava aceleradamente.

Ya seis debieron ser asistidas para pagar salarios. Ahora

se agregó el pedido de Santa Fe. Arcioni en Chubut quiere un congelamiento de salarios por seis meses. La madre de todas las crisis está en la provincia de Buenos Aires, que entró en el desfiladero de un posible default.

El acuerdo que Alberto Fernández y su ministro Guzmán buscan es una operación de rescate de los tenedores de la deuda. La contracara de esto es la muerte de niños wichis por malnutrición en el norte salteño.

Por eso, la política del gobierno es pedirles "mesura" a los trabajadores en sus reclamos salariales. Por eso se decretan sumas fijas y se eliminan las cláusulas gatillo de actualización.

Para rescatar a los especuladores se eliminó la movilidad jubilatoria. Ahora los jubilados dependerán de la "marcha de la economía".

Con todo, buscan tranquilizar a los acreedores externos a costa del empobrecimiento de los trabajadores. Pero los sacrificios a los que pretenden someter al pueblo argentino no van a evitar el default. La deuda es fraudulenta e impagable.

Para los trabajadores, el desafío que se nos presenta es defender nuestras reivindicaciones: el salario, las jubilaciones, las paritarias.

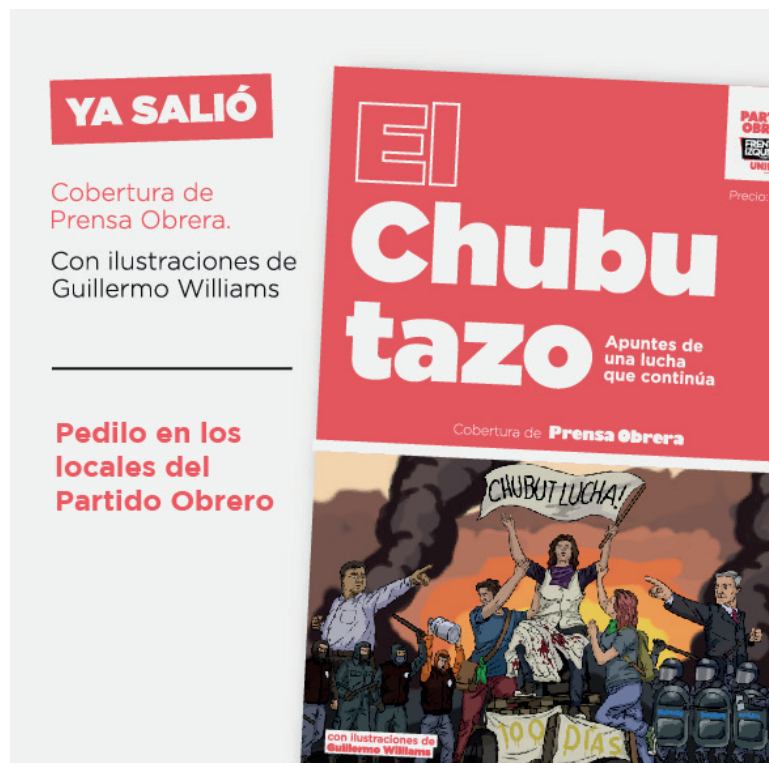
La CGT y las CTAs acompañan esta política del gobierno de Fernández. A la manipulación de la burocracia, oponemos la autonomía de los sindicatos y un congreso de delegados electos por las bases, que debata y resuelva un plan integral basado en la ruptura con el FMI y el no pago de deuda usuraria y fraudulenta.

La renegociación de la deuda y la situación de las provincias

Entre el gobierno y Juntos por el Cambio, con los gobernadores de Jujuy, Mendoza, Corrientes y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, llegaron a un acuerdo de crear una mesa de trabajo para discutir el endeudamiento que las provincias tienen con la Nación. A cambio de ello, el radicalismo y el macrismo votaron positivamente la ley de sustentabilidad de la deuda.

La “mesa de trabajo” es por uno de los reclamos: el referido a las deudas que las provincias tienen con la Nación. Son con el Tesoro Nacional (a cuenta de la coparticipación) y, la mayor parte, con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que maneja la Anses (la plata de los jubilados), a octubre del año pasado esas deudas sumaban más de 120.000 millones de pesos. Al aceptarle a Kicillof el “reperfilamiento” de la deuda de casi 300 millones de dólares que tenía con la Anses, las provincias exigen un trato igualitario y “patearlas” hasta 2024.

Pero el reclamo era más extenso: quieren que los compromisos en dólares que contrajeron sin el aval del gobierno nacional, muchos de los cuales vencen en el año próximo, sean parte de la negociación que está encarando el ministro Martín Guzmán con los bonistas y el FMI. Lo otro “es que las provincias sean autorizadas a tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal” (*La Nación*, 28/1) -o sea, no depender de la aprobación del Banco Central. También está la exigencia de que la Nación pague sus deudas con las provincias, algunas por



aportes a las cajas de jubilaciones, por obras públicas y convenios particulares.

Si bien el reclamo de Juntos por el Cambio fue hecho por las provincias que dirigen, expresa planteos de todas las dirigidas por el PJ empezando por Buenos Aires.

En conclusión, los gobernadores se fueron con las manos vacías, entre el gobierno y Juntos por el Cambio patearon la pelota para adelante para no entorpecer el objetivo común que es la operación de rescate de la deuda. Es claro que el gobierno nacional no puede hacerse cargo de los reclamos de las provincias si quiere mostrar que está dispuesto a cerrar el grifo como garantía para el pago de la deuda.

Chubut es la regla

Los reclamos de las provincias muestran la explosividad de la situación.

El año pasado, Chubut estuvo en el centro de la escena política durante toda la mitad del año pasado por la lucha de los docentes y estatales ante la falta de pago de sus salarios. Este año, Chubut tiene que hacer frente al pago de vencimientos de deuda por 14 mil millones pesos y el gobernador Mariano Arcioni anunció un ajuste descomunal que hasta ahora los trabajadores impidieron.

Chubut no es la excepción, sino la regla. Los vencimientos de deuda de las provincias este año arañan los 4.000 millones de dólares, a la cabeza está Buenos Aires con 2.700; el año próximo vence otra parte importante. El 75% de la deuda está

contraída en dólares; en el caso de Córdoba (que tiene su principal vencimiento en 2021), el 95% es en dólares y al calor de la devaluación ha crecido exponencialmente: cuando el dólar pasó de 45 a 60 pesos implicó un crecimiento en 40 mil millones de pesos.

Si consideramos que en dos años el dólar mayorista tuvo un aumento de casi el 200%, el endeudamiento provincial es directamente insostenible ya que los ingresos de las provincias con los cuales deben hacer frente a los pagos son exclusivamente en moneda nacional. En un cuadro de recesión, con la caída de la actividad industrial y del consumo, las recaudaciones por impuestos propios de las provincias y los nacionales (coparticipación) han caído en términos reales y, en algunos casos, absolutos.

La suspensión del “pacto fiscal” libera a las provincias para nuevos aumentos de impuestos, como ingresos brutos. Esto tiene un límite, porque ya las provincias procedieron a aumentar impuestos como el inmobiliario, además de los servicios y, a su vez, los municipios, las tasas propias. Todo sale principalmente de los mismos bolsillos, los consumidores, enflaquecidos por el aumento de precios, por la caída del salario y por la desocupación.

La diferencia de la situación de Chubut con el resto de las provincias es sólo de tiempo. Los gobernadores Juan Manzur en Tucumán y Omar Perotti en Santa Fe ya anunciaron la eliminación de las cláusulas gatillo de sus trabajadores estatales para hacer frente a la caída de la recaudación; en otras provincias comienzan las negociaciones y

la mayoría de los gobernadores se atenderá al mismo libreto.

Es el rumbo que tomó Alicia Kirchner en Santa Cruz, el gobierno que Alberto Fernández presenta como modelo, donde los 86.000 trabajadores perdieron entre un 60 o 65% de su poder adquisitivo.

Así como Arcioni no les toca un pelo a las petroleras, terratenientes, Aluar, pesqueras y los mismos especuladores financieros, los gobernadores actúan en defensa de los grupos capitalistas que operan en la provincia y de los acreedores.

La sombra de la rebelión popular

El gobierno de Chubut tuvo que pegar un retroceso con sus anuncios ante una lucha generalizada de los trabajadores de la provincia y hoy está empantanado en llevar adelante su plan. En Tucumán y Santa Fe, en pleno enero, también hubo movilizaciones ante el quite de la cláusula gatillo y la postergación del cronograma de pago, respectivamente.

El ajuste en las provincias actúa en forma directa contra docentes, trabajadores de la salud, empleados estatales, y también sobre los presupuestos para esas áreas, para la obra pública y para la ayuda social; es decir, se palpa en forma inmediata por el conjunto de la población y es lo que lo hace más explosivo.

El papel de la burocracia de los sindicatos, que actúa como aval de estas medidas, tiene también sus límites. La pueblada mendocina, en ese sentido, fue una dura lección. La sombra de la rebelión popular está presente a la par de las presiones por la renegociación de la deuda.

Eduardo Salas

Desde Tierra del Fuego hasta Salta, pasando por los lugares más recónditos del país, el Partido Obrero viene realizando una Campaña Financiera que avanzó más en enero -contra cualquier pronóstico- que todo lo que se había desarrollado en diciembre.

Las razones para este fenómeno tienen un carácter decididamente político. Ocurre que hay sectores de trabajadores y activistas que, aún sin definir una ruptura con el gobierno, observan cómo las promesas de campaña no se cumplen, cómo se marcha a un ajuste contra los trabajadores y un rescate a los capitalistas.

Los miles de aportes que se vienen consiguiendo en las provincias y regionales son una expresión de apoyo no sólo a la política que lleva adelante el Partido Obrero, sino también a la existencia de un polo político independiente de la clase obrera, a la existencia de agrupaciones clasistas en cada uno de los terrenos donde se desarrolla la lucha de clases, ya sea el movimiento obrero, los

desocupados, los centros de estudiantes o el movimiento de mujeres. Esto cobra una importancia especial en la medida en que casi la totalidad de la burocracia sindical y piquetera ha incorporado sus organizaciones a las filas gubernamentales, buscando encorsetar incluso la lucha por las reivindicaciones más acuciantes.

La votación de la ley aprobada el último miércoles es particularmente ilustrativa de la situación política que vivimos y del rol que juega el PO y el Frente de Izquierda en la situación: tanto el oficialismo como la oposición patronal apoyaron un proyecto de rescate a los acreedores a costa de un ajuste a jubilados y trabajadores, mientras que nuestros diputados se plantaron en contra del proyecto,

denunciando el colonialismo político y económico al que buscan someternos. Todo un planteo de clase.

Cómo la seguimos

Lejos de conformarnos con los avances obtenidos hasta ahora, los militantes y simpatizantes del Partido Obrero nos volcamos de lleno a la continuidad de la Campaña para alcanzar el 100% de nuestros objetivos. Sigue habiendo una cantidad importante de compañeros a quienes por una razón u otra todavía no se les ha planteado el problema de la Campaña Financiera, que es el problema de cómo se financia una organización revolucionaria, independiente del Estado y de las patronales.

La Campaña Financiera no se toma vacaciones

Vamos por un febrero que nos permita alcanzar todos los objetivos

Más allá de los aportes conquistados y por conquistar tenemos también una herramienta muy valiosa para aquellos compañeros con menos recursos o con una relación política menos consolidada que es la rifa que sortearemos el 29 de febrero. Luego de que el Polo Obrero realizara su propia rifa (que además repartió grandes premios), existe una expectativa en aprovechar esta oportunidad para consolidar el apoyo sumándose a la colocación de la rifa.

Finalmente, están las actividades financieras que se organizan en los frentes, que son iniciativas que muestran el afán de cada regional por pelear por recursos para un partido que desarrolló una actividad ferviente durante todo el año pasado y se prepara

para un 2020 de grandes luchas en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Cabe destacar que las regionales que están haciendo las mejores campañas -como Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y La Matanza, entre otras- se apoyan también en estas actividades.

En síntesis, los primeros días del nuevo gobierno han demostrado que no hay lugar para ninguna “luna de miel”, que se están preparando las bases para un nuevo default a los trabajadores, buscando que seamos nosotros los que paguemos por una nueva bancarrota del país que ellos mismos generaron. En este contexto cobra una importancia primordial la defensa de la independencia política de los trabajadores y sus organizaciones, tanto sindicales como políticas. El Partido Obrero se prepara para esta pelea y va a fondo en la lucha por obtener sus recursos, siguiendo este principio fundamental.

Guido Lapa



Todos los caminos conducen al FMI

GABRIEL SOLANO

Cuando la gira por Estados Unidos del ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba a punto de culminar en un rotundo fracaso, la reunión final con el FMI -calificada por los propios funcionarios del organismo como "muy positiva"- sirvió para tranquilizar las aguas. Con un gobierno que vive al día, los medios de comunicación que responden al oficialismo salieron rápido a distribuir el comunicado del FMI como prueba fehaciente de que habría avances en su objetivo de reestructurar la deuda. La caída de la cotización de los bonos, muchos de ellos por debajo del 50% de su valor nominal, y la suba correspondiente del riesgo país parecieron mostrar, sin embargo, lo contrario. Más contundente aún fue la confesión de Guzmán ante fondos de inversión y banqueros, cuando reconoció que la aceptación de la propuesta de reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires realizada por Kicillof había tenido sólo un 26% de aceptación, contra un piso necesario del 75%. Así, creció el escenario de default de la principal provincia argentina.

Según toda la información periodística, el fracaso de la reunión de Guzmán con los acreedores se debió a que no presentó ningún plan concreto de reestructuración de la deuda. Esto es establecer qué hacer con el capital, los intereses y los plazos de pago. Días antes, sin embargo, su mentor Joseph Stiglitz había anunciado desde Davos que la deuda argentina requería quitas significativas para ser sostenible. Otros economistas presentaron conclusiones similares, mostrando la envergadura de la bancarrota nacional y el carácter impagable de la deuda del país, no sólo ya del Estado nacional sino también de las provincias e incluso de grupos capitalistas de mucha relevancia. Pero una quita de niveles elevados, más aún si afecta la tasa de interés e incluye un período de gracia de varios años, difícilmente sea aceptado graciosamente por los acreedores. Frente a un escenario así, probablemente opten por vender sus tenencias, que pasarían a mano de fondos buitres que tienen por lógica litigar para cobrar el 100% del valor nominal de la deuda. Esto conduciría al default no ya de la provincia de Buenos Aires sino del conjunto de la deuda. Justamente lo que Alberto Fernández quiere evitar a toda costa, porque implica para un gobierno capitalista la pérdida de todo acceso al crédito internacional y penalidades comerciales y judiciales de diverso tipo.

Esta debilidad estructural del gobierno la conoce mejor que nadie el FMI, que ofrece sus servicios para tratar de facilitar el acuerdo con los bonistas privados. Pero ese servicio tiene un precio, en términos económicos y políticos que hay que ver si Alberto Fernández está en condiciones de afrontar. La reciente gira presidencial por Israel, y la reunión franelera con el primer ministro Benjamin



El fracaso de la reunión del ministro Guzmán con los acreedores se debió a que no presentó ningún plan concreto de reestructuración de la deuda

Netanyahu justo cuando éste se apresta a consumir un robo histórico al pueblo palestino auspiciado directamente por Trump, muestra que el nivel de concesiones puede ser superior a lo previsto. Para tratar de envaselar la carta del FMI el gobierno ha solicitado la bendición papal, que ofrece la discreción de los muros del Vaticano para una reunión directa con la jefa del Fondo y los funcionarios locales que se realizará en los próximos días.

¿Plan económico?

La cuestión del FMI está en conexión directa con la otra demanda que realiza el capital financiero. Las permanentes alusiones de sus voceros a que no se conoce un "plan económico" esconden el más prosaico reclamo de un verdadero ajustazo contra el pueblo. El llamado "sendero fiscal" que todos piden conocer significa ni más ni menos que la utilización del presupuesto de Estado para el pago de los compromisos de deuda. Los primeros pasos dados por Alberto Fernández, suspendiendo la movilidad jubilatoria e imponiendo un impuestazo generalizado, van en esa dirección pero están lejos de ser suficientes. Varios economistas calcularon que incluso con la ley de emergencia las cuentas fiscales arrojarían un déficit cercano al 1% cuando, siempre según esos mismos cálculos, debieran pasar a un superávit del 2% para hacer frente al pago de la deuda.

Un ajuste de este tipo, sin embargo, choca con contradicciones de fondo del proceso económico.

Mientras, el gobierno nacional está apretando a las provincias para que hagan un ajuste en regla.

El intento de reducir al menos parcialmente la inflación, echando mano al congelamiento transitorio de tarifas, naftas y transporte conlleva un costo fiscal que no es compatible con el superávit que reclaman los bonistas y el FMI. Pero, por otro lado, mantener los subsidios millonarios requiere de una emisión monetaria de enormes dimen-

siones. El gobierno también ha decidido mantener anclado el dólar oficial como medida antiinflacionaria, pero el permanente crecimiento de los precios termina erosionando el tipo de cambio que se utiliza para el intercambio comercial con el extranjero, lo que puede perjudicar el superávit comercial, que es la única fuente actual de dólares. La 'estabilización económica' que fue definida como objetivo para esta fase por parte del gobierno no es otra cosa que la muestra de un impasse que posterga contradicciones de fondo, que deberán encontrar una resolución en un plazo acotado. Mientras tanto, el deterioro continúa como lo prueba la inflación de enero que se prevé en un 3.5% o la creciente brecha entre las distintas cotizaciones del dólar. La salida progresiva de fondo requeriría una reestructuración no de la deuda sino del conjunto de la economía, eliminando el parasitismo capitalista y estableciendo un plan integral que establezca la estatización de los servicios públicos y de la energía y el transporte, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la investigación a fondo de la deuda externa y su no pago, la nacionalización de la gran industria y de las cadenas comerciales, y el control obrero general de la economía. Nada de esto, claro está, figura ni por asomo en la hoja de ruta de Alberto Fernández.

Pasar a la acción

El equilibrio delicado en el que se mueve el gobierno muestra que es consciente que las medidas que reclaman el FMI y los bonistas pueden generar una rebelión popular. Pero esto no quita que no avance a tientas en esa dirección.

Este temor está presente en las provincias, quienes reclaman que, a cambio del apoyo a la ley de renegociación de la deuda en el Congreso, el gobierno nacional salga en su salvataje. Eso, sin embargo, choca con el superávit fiscal que busca reunir Alberto Fernández para pagar la deuda. La política de la Rosada es que las provincias lleven ade-

lante un ajuste en regla. La suspensión del pacto fiscal, incluido en el paquete puesto a consideración en el Congreso, tiene como propósito dar luz verde a las provincias para un aumento masivo de impuestos, pero eso abre las puertas a un escenario explosivo.

Lo mismo vale respecto a la decisión de mantener el sistema UVA en los créditos hipotecarios y anular los subsidios que regían para los deudores. Y la decisión del gobierno de Chubut de congelar los salarios por 180 días mientras decide pagar puntualmente los vencimientos de la deuda provincial. Sin embargo, un aumento generalizado de las naftas, el transporte y las tarifas tiene un impacto generalizado de un alcance claramente superior. Después de todo, las rebeliones en Ecuador y en Chile fueron detonadas por aumentos en las naftas y en el transporte. Ese miedo a la rebelión es esgrimido por el gobierno como carta de negociación con el FMI y los principales estados imperialistas. Los Fernández se ofrecen como estabilizadores de la región y piden no ser desestabilizados. Veremos cómo les va. El capital suele reconocer los límites recién cuando las masas se lo hacen ver de modo palpable e inconfundible. Finalmente, la historia es la de lucha de clases.

Para los trabajadores el desafío que se le presenta es defender sus reivindicaciones, rechazando el chantaje de un gobierno que usa la crisis como un medio para postergar la conquista de derechos y justificar un ajuste. Es lo que hace Kicillof con los docentes a los que les niega la cláusula gatillo para no perder con la inflación, o la eliminación de la movilidad previsional impuesta con la ley de emergencia. Los aumentos por decreto de los salarios o las sumas fijas aceptadas ya por varios sindicatos muestran la intención de suspender las paritarias de hecho o de derecho. Esto plantea un programa de intervención inmediata, que servirá también para procesar una experiencia de fondo de los trabajadores con el gobierno: paritarias sin techo, recuperación de lo perdido con la inflación y cláusula gatillo, defensa de la movilidad previsional y recomposición de los haberes, prohibición de los despidos y suspensiones, no a los impuestazos pactados entre el oficialismo y la oposición. Es necesario abrir una deliberación en los sindicatos y organizaciones obreras e impulsar la batalla por un Congreso de delegados electos del movimiento obrero ocupado y desocupado para impulsar estos reclamos y superar el chaleco de fuerza que constituye la burocracia sindical, de todos los colores, que viene colaborando con el gobierno.

Sobre esta base planteamos una campaña de lucha inmediata que debe ir acompañada del reclamo de fondo del desconocimiento de la deuda usuraria que busca ser rescatada por kirchneristas, pejetistas y macristas. La misión del FMI que vendrá en febrero ofrecerá otra oportunidad de movilización, que aportará a la clarificación política.

La batalla del FIT-Unidad contra el pacto de rescate de la deuda

“La soberanía nacional quedó en las oficinas del FMI”

El miércoles 29, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reestructuración de la deuda externa. Sólo los diputados del Frente de Izquierda votaron en contra. Compartimos la intervención de Romina Del Plá

A esta altura de la sesión, ya podemos ir sacando algunas conclusiones. Efectivamente, no estamos frente a un debate del Congreso para involucrarse en el tema de la deuda, estamos frente a un pacto político del oficialismo y la oposición para darle garantías a los bonistas, a los bancos y al FMI, como aquí reclamó la diputada [Elisa] Carrió.

Creo que, dada su fervorosa intervención, nos ahorra muchas palabras sobre la magnitud de ese acuerdo político y cuál es el objetivo: el objetivo es tranquilizar al Fondo, tranquilizar a los acreedores y decirles “no hay problema, en cualquier condición esta deuda se va pagar”.

Entonces, aquí se está tratando de introducir un concepto que hay que erradicar de plano, el concepto que se está tratando de presentar es que para salir de la pobreza hay que pagar la deuda; una situación completamente absurda. No sólo absurda sino mentirosa. Es una estafa, una estafa como la propia deuda. El pago de la deuda, su renegociación, nos lleva inexorablemente a una nueva quiebra nacional. En el camino, sin embargo, se van a intentar todo tipo de ajustes, como ya se han empezado a votar. Y de todas maneras, ese sacrificio nacional no nos va a evitar el quebranto, porque la deuda es impagable. Entonces, es mentira que acá se está votando un mandato, como trataron de presentar algunos diputados del oficialismo. ¿De ninguna manera! Acá se está votando un cheque en blanco y eso es lo que dicen todos los proyectos. Por eso, mientras alguno quiere que le traigan el plan, no le van a traer ningún plan! Porque la cuestión consiste en ver hasta qué punto convencen a los acreedores y logran un acuerdo y, en función de eso, se va a lograr todo lo demás.

¿A quién quieren convencer con que se va a recuperar la soberanía de las cuentas nacionales? Cuando no han podido presentar ni siquiera un presupuesto, porque lo van a hacer después de negociar con los buitres. Es un escándalo. Pero como es un escándalo lo tienen que presentar en boca de algunos que alguna vez han revistado en el progresismo, para tratar de que la estafa sea todavía mayor y la distracción sea mayor. No cuenten con el Partido Obrero, no cuenten con el Frente de Izquierda. Por el contrario, vamos a reforzar la campaña de denuncia de lo que significa este nue-



vo sometimiento nacional, este canje que legaliza una deuda ilegal, fraudulenta y usuraria; un sometimiento que viene de la mano de la suspensión de la actualización jubilatoria; que viene de la mano de esta idea de que los jubilados que superan apenas la mínima se la tienen que bancar; de que los trabajadores no seamos excesivos al pedir que los salarios lleguen, no digamos ya a la canasta familiar, sino siquiera a la canasta de pobreza, porque serían “reclamos desmedidos”.

Es un escándalo que se le pretenda presentar a la población, porque, claro, los trabajadores sí pagamos nuestras deudas. Los trabajadores, cuando contraemos una deuda, claro que la pagamos. Los que no las pagan son los capitalistas, que luego desde el gobierno, con cada uno de los amigos, obtienen exenciones impositivas, perdones de deuda. Y esto vale para uno y otro y otro gobierno, los que han pasado por todas las instancias. Los trabajadores sí pagamos nuestras deudas. Y nos vienen haciendo pagar década tras década las deudas que contraen las patronales y todos los amigos que luego ocupan los lugares de gobierno. Entonces, esto hay que decirlo muy claro: no hay mandato ni recuperación de la soberanía, hay sometimiento nacional a fondo.

Y quiero aquí mencionar dos temas. Uno es que éste es un fenómeno mundial, lo dije ayer en la comisión [reunión realizada el martes]. El mecanismo de sometimiento y exacción de los pueblos no es sólo de la Argen-

ta, es un fenómeno mundial. Cada uno de los 7.700 millones de habitantes del mundo deberíamos 32.500 dólares per cápita, dado que el negocio querían tomar, como quitar a Hezbollah de la lista de agrupaciones terroristas que había sido incluida por reclamo del imperialismo norteamericano y de Trump, y resulta que retrocedieron por el sencillo tema de que no quieren generarse problemas innecesarios. ¿Y la soberanía dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la independencia nacional? Quedó en las oficinas del FMI y del gobierno norteamericano, como así ha quedado la justicia argentina. Porque como muy bien dijo ayer su procurador del Tesoro, muy instructiva su intervención, dijo: los bonos de 2005, los de 2010, los de 2016 y estos de ahora, todos, son bajo jurisdicción extranjera, o sea, bajo el kirchnerismo, bajo el macrismo, ahora bajo el Frente de Todos, todos fijando la sede de la justicia en los tribunales de Nueva York. Esa es la expresión más cabal del cipayismo.

“¿Dónde quedó la independencia nacional?”

Luego vamos a discutir el tema de las tropas [se refiere al proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras y que se debatió en la misma sesión]. Que acá no existe ninguna soberanía lo demuestra, no sólo que la diputada Carrió no quiere que se diga nada porque teme no sé qué juicio; sino que acá los propios funcionarios,

el canciller [Felipe] Solá y otros han obligado a modificar, incluso, algunas medidas de política internacional que los propios funcionarios de este gobierno querían tomar, como quitar a Hezbollah de la lista de agrupaciones terroristas que había sido incluida por reclamo del imperialismo norteamericano y de Trump, y resulta que retrocedieron por el sencillo tema de que no quieren generarse problemas innecesarios. ¿Y la soberanía dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la independencia nacional? Quedó en las oficinas del FMI y del gobierno norteamericano, como así ha quedado la justicia argentina. Porque como muy bien dijo ayer su procurador del Tesoro, muy instructiva su intervención, dijo: los bonos de 2005, los de 2010, los de 2016 y estos de ahora, todos, son bajo jurisdicción extranjera, o sea, bajo el kirchnerismo, bajo el macrismo, ahora bajo el Frente de Todos, todos fijando la sede de la justicia en los tribunales de Nueva York. Esa es la expresión más cabal del cipayismo.

El Frente de Izquierda plantea que hay que investigar la deuda, desconocer todo lo que de ella es ilegítima, ilegal, usuraria y fraudulenta, que es la enorme mayoría, y proceder a utilizar esos recursos para el desarrollo de un programa integral al servicio de los trabajadores y las trabajadoras de este país, que somos los que ponemos en pie la verdadera riqueza y no los banqueros y las patronales que son los que viven a costillas de todos los demás.



Gran acto frente al Congreso Nacional

Las y los referentes llamaron a una gran campaña contra el pago y por todos los reclamos populares

La votación del proyecto de “sostenibilidad” de la deuda delimitó claramente dos campos.

De un lado, el conjunto de los bloques patronales del oficialismo y la oposición cerraron filas para darle rienda suelta al gobierno en sus negociaciones. Del otro lado, sólo estuvo el Frente de Izquierda-Unidad, que rechazó tanto en el recinto como en las calles -con un acto frente al Congreso- este rescate de los especuladores internacionales y una nueva entrega de la soberanía nacional.

El acto contó con las intervenciones de la diputada Romina Del Plá, del Partido Obrero; del diputado Nicolás del Caño (PTS), y de Guillermo Pacagnini (MST) y Mónica Schlotthauer (IS).

El discurso de Del Plá denunció la “votación cerrada y sin grietas” entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los bloques de todos los gobernadores. Para la diputada, el reclamo que hizo uno de los diputados que aprobaron el proyecto de “dar una continuidad jurídica del Estado” confirmaba lo que “siempre hemos denunciado” desde la izquierda, la continuidad entre la dictadura y la democracia, y entre los diferentes gobiernos democráticos, en su compromiso con el capital financiero. “Todos votaron cómo garantizan el pago de la deuda que contrajeron unos y otros. No sea cosa, como dijo [el ministro de Economía Martín] Guzmán, que sienten a algún funcionario en el banquillo de los acusados por esta entrega”, señaló.

Del Plá hizo referencia a los megacajeros de 2005 y 2010 por parte del kirchnerismo, que les garantizaron “negocios a los fondos buitres por una

deuda defaultada, como reconoció el diputado que cerró [en la sesión] por el Frente de Todos”. Señaló que, luego del megaendeudamiento que profundizó el macrismo, aquella fuerza vuelve al gobierno para un nuevo ciclo de pago. En oposición a ello, señaló la referente, lo que debe hacerse con la deuda usuraria es investigar y desconocerla, “y no entregar la economía para garantizar los negocios de las patronales”.

La diputada destacó la consecuencia del Frente de Izquierda en su denuncia, expresada en el recinto en los únicos dos votos negativos al proyecto, el de ella y el de Nicolás del Caño (PTS). Y denunció la impostura de quienes votaron favorablemente en nombre de “atender al problema de la pobreza”, marcando que los fondos para los especuladores “están saliendo del bolsillo de los jubilados” con la suspensión de la movilidad jubilatoria, de los trabajadores estatales a quienes se niega la cláusula gatillo, de los trabajadores a quienes se les exige mesura en sus reclamos paritarios. Señaló que “queremos paritarias libres y aumentos salariales iguales al costo de la canasta familiar” y advirtió que la contracara de la votación de hoy es la continuidad de los despidos en empresas, así como la situación irresuelta para los trabajadores de las que han cerrado y de los estatales despedidos en los últimos años.

Por su parte, Guillermo Pacagnini destacó la presencia de miles de compañeros del Frente de Izquierda-Unidad y la posibilidad de canalizar la bronca de quienes votaron al gobierno y empiezan a desconfiar del mismo. Denunció el aval al pago de la deuda de sectores “que se de-

de izquierda popular” integrados al oficialismo, así como la complicidad de la CGT y el conjunto de la burocracia sindical a que la “variable de ajuste” siga siendo el salario.

Schlotthauer saludó la intervención de los diputados del FIT en el recinto, que contrastó con un recinto donde todos “se agachan frente a los saqueadores”, y se refirió a las movilizaciones de masas del último período en la región, afirmando que “vamos a seguir bregando por la liberación junto a los compañeros de Mendoza, Chubut, Chile, Ecuador, que se han levantado contra las políticas antipopulares”.

Del Caño recordó que, durante el anterior gobierno, “muchos legisladores hicieron denuncias, e incluso llegaron a decir que había que investigar la deuda de Macri” y “ahora nos dicen que hay que pagar esa deuda”. A su turno, subrayó que “la política exterior del gobierno está condicionada por el alineamiento con los Estados Unidos y Trump, como lo demuestra la actitud de benevolencia de Alberto Fernández con Netanyahu, el asesino serial de palestinos”.

El conjunto de las intervenciones concluyeron con el llamado a una gran campaña por la investigación y el no pago de la deuda, donde se integren los reclamos salariales, jubilatorios y de desocupados y un programa de reorganización social de raíz afectando a los capitalistas. Como señaló Del Plá, “de la mano del pago de la deuda no hay ninguna salida” y “vamos a un nuevo hundimiento nacional”, por lo que marcó la necesidad de “poner en pie una alternativa política independiente de los trabajadores”.

Votan la entrada de tropas yanquis a la Argentina



En la sesión que tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de “sostenibilidad” de la deuda, que otorga un cheque en blanco al gobierno para el rescate -reestructuración mediante- de los acreedores, el oficialismo aprovechó para poner a votación una entrega adicional de la soberanía nacional.

La iniciativa presentada autoriza la entrada de tropas extranjeras a nuestro país, así como la salida de tropas nacionales para operaciones militares conjuntas con aquellas, entre septiembre de 2019 y agosto de este año, en el marco del “Programa de Ejercicios Combinados” de Estados Unidos en el continente.

Con este nuevo gesto de sumisión al imperialismo -en línea con la visita de Fernández a Israel, la calificación sostenida de Hezbollah como organización terrorista y la negativa a romper con el derechista Grupo de Lima-, el gobierno afirma su continuidad con la orientación servil del macrismo y busca dar otra garantía del pago de la deuda.

El acuerdo satisface pretensiones clave del imperialismo yanqui en la región, fortaleciendo a los enemigos de las rebeliones que vienen atravesando a nuestro continente ante los efectos de la crisis capitalista, desde Puerto Rico a Chile. Con operaciones como estas, el Pentágono selecciona y trata de cooptar a mandos militares de las naciones suda-

americanas, para actuar de forma mancomunada -con pretextos como defender la paz mundial o combatir el terrorismo, el narcotráfico o el contrabando- en la represión de los levantamientos populares y en operativos golpistas como el vivido en Bolivia.

El proyecto viene acompañado con un larguísimo detalle de los numerosos operativos que harán su entrada al país. Para tener noticia de la magnitud e implicancias del acuerdo, se puede tomar uno de estos, el llamado “Gringo Gaucho”, que supone la visita de un portaviones yanqui con 5.000 efectivos a bordo, acompañado por una fragata con 330 militares más, que harán ejercicios a lo largo de la costa marítima argentina, acompañados por una corbeta argentina con 115 efectivos, 2 aviones y un helicóptero con 19 militares más. Vale recordar, como hizo la diputada Romina Del Plá, que durante el mayor conflicto en el Atlántico argentino, la guerra de Malvinas de 1982, los Estados Unidos se pusieron del lado del agresor británico, sin importarle el carácter lamebotas de la dictadura argentina.

La norma se coloca a votación en un contexto de acercamiento del gobierno a los mandos reaccionarios de las Fuerzas Armadas, ya expresado con la aprobación meses atrás del proyecto presentado por Agustín Rossi -entonces jefe de la bancada peronista en Diputados, y

actual ministro de Defensa- de reequipamiento del aparato militar. En esa ocasión, la iniciativa contó con el apoyo entusiasta de la bancada del PRO.

Quien conoce la historia no sale sorprendido: años antes de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich habilitasen la utilización de los repudiados militares en tareas de represión interna, bajo la anterior gestión de Rossi se había avanzado fuerte en este propósito con la designación de César Milani al frente del Ejército, la sanción de la Ley Antiterrorista y la prórroga del Operativo Escudo Norte, que incrementaba la presencia de milicos en el norte del país. Sin ir más lejos, en 2007 se había aprobado en el Congreso la entrada de tropas extranjeras y salida de las propias para operaciones conjuntas con el imperialismo yanqui entre fines de ese año y mediados del 2008, denominadas con el mismo nombre: “Programa de Ejercicios Combinados”.

El Frente de Izquierda rechazó el proyecto. Como señaló Romina Del Plá, “un gobierno de trabajadores organizará a las Fuerzas Armadas no como instrumentos represivos contra el pueblo, sino sobre nuevas bases sociales, para defender la revolución de nuestro país contra cualquier intento de intervención o agresión imperialista”.

Corresponsal



La paritaria nacional docente no puede definirse sin mandato

El 27 de enero arrancaron las reuniones de la Paritaria Nacional Docente, que el gobierno de Alberto Fernández convocó en los términos de la ley de Financiamiento Educativo, o sea, como Convenio Marco que fija "pautas generales sobre condiciones laborales, carrera, salario mínimo de las trabajadoras y trabajadores docentes, calendario educativo, entre otros aspectos".

Durante el gobierno anterior la paritaria se convocó sólo una vez. Utilizando la cláusula que fijó el salario mínimo docente en un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil, el macrismo eliminó el tema salarial de la mesa de discusión. Utilizó la ambigüedad de la propia ley para congelar el Fondo Nacional de Incentivo Docente y eliminar gradualmente el Fondo Compensador, de "ayuda" a las provincias más pobres para llegar al mínimo garantizado. Todas cifras convenientemente en negro y que achatan la escala salarial, y no son cobrados por los jubilados.

Es bueno recordar que esas reuniones con el entonces ministro Esteban Bullrich, de 2015-2016, fueron saludadas por las direcciones sindicales, luego de años de paritarias cerradas por decreto por el gobierno K. La firma de ese acuerdo le regaló al macrismo el inicio de clases sin conflicto en 2016 a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Sólo la

oposición Multicolor convocó a un no inicio frente a Vidal, mientras la "resistencia con aguante" no pasaba de un slogan archivado.

¿Cuál debe ser el pliego que deben llevar los gremios a esta nueva convocatoria?

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anticipó que condicionan el debate salarial a una suma fija, probablemente por la vía del aumento del Incentivo Docente. El salario docente mínimo para el maestro de grado es de 20.250 pesos, cuando la canasta de pobreza ya supera los 39.000. El mínimo es lo que cobran casi todas las provincias del norte, aunque hay cargos que están por debajo de eso, dado que el salario garantizado es sólo para el maestro de grado, sin tener incidencia directa sobre todo el escalafón.

Al no discutirse la composición interna del salario, los básicos pueden permanecer sin modificaciones. Docentes con varios años de antigüedad cobran lo mismo que el que recién se inicia, dado que no superan el "mínimo".

El achatamiento del escalafón se expresa en que la diferencia salarial entre el que inicia y el de máxima antigüedad en todo el país es del 30% en promedio y no del 100 al 125% (que es lo que se percibe por antigüedad, pero sólo sobre los básicos).

Las direcciones de Ctera, Suteba y CTA dejaron trascender que



El planteo elemental es un salario básico unificado nacional, que debería acercarse a la canasta básica para el cargo testigo.

aceptarían la suma fija; por supuesto sin mandato alguno de la docencia.

El planteo elemental es un salario básico unificado nacional, que debería acercarse a la canasta básica para el cargo testigo, actualizado mensualmente y automáticamente por inflación y, desde allí, trasladarse al conjunto de la escala salarial.

La nacionalización del sistema educativo es perentoria. La agudización del sometimiento al endeudamiento externo y de los sucesivos ajustes en los presupuestos provinciales reedita el vaciamiento de los sistemas educativos provinciales: en 2019 Chubut estuvo sin clases por cuatro meses; Chaco

y Salta otro tanto. La lucha docente no es la que obstaculiza el funcionamiento del sistema educativo. Son los gobiernos los que agudizan su vaciamiento.

En camino a la nacionalización es necesario defender los derechos laborales de la docencia y el Estatuto del Docente. Un planteo de arranque debería ser la exigencia de eliminar todas las cláusulas de presentismo que existen en el país, como el ignominioso ítem aula de Mendoza o la cláusula antihuelga de Santa Cruz, donde la asistencia perfecta se traduce en un puntaje extraordinario para el acceso a cargos.

También la eliminación de las

resoluciones que fijan topes arbitrarios y el despidos de cientos de docentes como en Santiago del Estero, o los cierres masivos de cursos y carreras, especialmente terciarios, en Jujuy.

Otro tema ineludible es el cumplimiento de los acuerdos salariales firmados por los gobiernos provinciales, y que están siendo burlados tanto en Tucumán y Santa Fe como en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo el pase a los derechos y estabilidad del Estatuto de los docentes precarizados, sean de programas socioeducativos, planes Fines, contexto de encierro, y cualquier otro en esa condición.

Nada de esto aparece en el planteo de la burocracia.

Serán los temas de las asambleas y plenarios que impulsaremos en los sindicatos combativos y que reclamaremos sean convocadas en todos los gremios, junto a plenarios de delegados con mandato.

Y será también la agenda de debate y movilización del XII Congreso Nacional de Tribuna Docente, que sesionará en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA los próximos 15 y 16 de febrero. Manos a la obra para convertir este ámbito de deliberación de la docencia combativa en un punto de referencia para la docencia y los estudiantes terciarios de todo el país.

Romina Del Plá

SANTA FE

Perotti anula la cláusula gatillo, Sonia Alesso acompaña

El gobierno santafesino comunicó, a través de voceros y ministros, la anulación de la cláusula gatillo para docentes, estatales y jubilados, y un aumento por decreto de un 4,1% a cuenta de la próxima paritaria. En ese cuadro, Sonia Alesso (secretaria general de Amsafe Provincial y de Ctera) no dudó en desprestigiar a la cláusula gatillo sirviendo de apoyo al propio gobierno. Ante los medios, Alesso declaró que "no era la panacea" y que no se podía discutir "cláusula sí o cláusula no" (*La Capital*, 22/1), lo que da cuenta de su disposición a entregar esta herramienta gremial que -aún con déficit- compensa el salario frente a la inflación.

A través de un comunicado, Amsafe Provincial anunciaba que "el gobierno otorga el aumento correspondiente a la actualización por in-

flación del mes de noviembre", ocultando que es un aumento por suma fija a cuenta de la próxima paritaria, que implica la eliminación de la cláusula y que tampoco cubre lo que correspondería por cláusula gatillo, ya que van a adeudar un 3,8% correspondiente a la inflación del mes de diciembre. Amsafe Rosario, por el contrario, inmediatamente rechazó estas declaraciones, exigiendo paritarias libres sin condicionamientos y advirtió de la maniobra de la deuda del 3,8% del mes de diciembre y del acompañamiento de la dirección provincial.

Jorge Hoffmann, secretario general de ATE Santa Fe, no dudó en reconocer la paritaria como ámbito de discusión y negociación para luego sentenciar que la cláusula "es un elemento más, que tuvo buena prensa pero no empató la infla-

ción" (*El Ciudadano*, 22/1). Al atacar la cláusula gatillo, Hoffmann, un entregador serial del salario, anticipa que no pretende luchar para evitar que los salarios sigan perdiendo frente a la inflación. Ni hablemos de una recomposición salarial, cuando la mayoría de los estatales está por debajo de la línea de pobreza.

Que la paguen los capitalistas

El gobierno ha tomado esta medida de ajuste luego de argumentar que es "para hacer frente al pago de deudas de contratistas, proveedores y volver a constituir el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco)". Sin embargo, viene de aprobar una reforma tributaria que mantiene prácticamente intactos los intereses de los grandes grupos agroexportadores, industriales y sojeros de la provincia.

Por lo tanto, ¿quiénes son los que pagarán la deuda? Serán los trabajadores al resignar la indexación de su salario. Hay que ser muy claros, un aumento de suma fija se licúa con la inflación y devaluación. El gobierno pretende eliminar cláusulas gatillo (como hizo el gobierno de Manzur en Tucumán), otorgar aumentos por decreto a cuenta de acuerdos posteriores que consolidan salarios de miseria y socavar las negociaciones paritarias. La pelea entonces es por que la crisis en la que está sumergida la provincia la paguen los grandes grupos capitalistas que son quienes nos han arrastrado a esta situación, y no los trabajadores.

Deliberación y un plan de lucha

El pasado 2 de enero, cuando el gobierno había anunciado el pago

extendido de salarios y jubilaciones y comenzaba esta catarata de ataques, una inmensa movilización de un millar de docentes, estatales y jubilados con Amsafe Rosario a la cabeza, recorrió las calles de Rosario. La misma respuesta se reproduce en varios departamentos de la provincia. Hay una predisposición a la lucha por parte de las bases docentes y estatales. Por ello urge la necesidad de un plenario de delegados de base de estatales y docentes de toda la provincia, para lanzar un plan de lucha en febrero, para cuando se reúna la paritaria, para defender el salario y la cláusula gatillo. Por una paritaria libre, sin condicionamientos y por el pase a planta de trabajadores y docentes precarizados.

Lucía Rigalli

XII CONGRESO

TRIBUNA
DOCENTE

15 y 16 de febrero 2020
Facultad de Cs. Sociales - UBA

Defendamos las paritarias

El acuerdo bancario es un ariete contra el salario

El reciente acuerdo paritario firmado por La Bancaria consistente en una suma fija para enero y febrero (que varía según las distintas categorías desde los 4.500 a los 10.500 pesos) reafirma el alineamiento incondicional de Sergio Palazzo y la Corriente Federal kirchnerista con la política de "emergencia" de Alberto Fernández.

El comunicado del palazzismo resalta la defensa exitosa del salario bancario, pero este "adelanto", como en años anteriores, no es acumulativo y no se aplica al resto de los conceptos. El básico inicial interanual a diciembre se modificó en algo más de 9 mil pesos (pasó de 29.176 en diciembre de 2018 a 38.400 pesos un año después).

Luego de haber solicitado a los gremios "moderación en los reclamos", que el Gobierno haya reaccionado "con entusiasmo" es revelador. La moderación que Fernández pidió a los trabajadores no se la exige a los bancos, que siguen cobrando por préstamos y otros servicios a tasas siderales, que duplican las que pagan por los plazos fijos.

Recordemos que "el salario real promedio de los trabajadores en blanco cayó 6,3% en 2018 y 8% el año pasado", según la consultora Ecolatina. Un estudio de los trabajadores del Indec establece que el salario mínimo debería ser de casi 62 mil pesos para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo; o sea ¡cuatro veces su valor actual!



Planteamos la autonomía de los sindicatos y un congreso de delegados electos por las bases

Paritarias suspendidas

La advertencia del gobierno es que "no se firmarán paritarias anuales hasta la convocatoria del Consejo Económico y Social", prevista para el segundo trimestre del año o para cuando culmine la negociación con el FMI. Esto significa postergar las negociaciones libres, al menos hasta abril. Un paso supuestamente necesario para "generar las condiciones de estabilidad que sienten las bases para el repago de la deuda".

A juicio de Fernández las cláusulas gatillo que permiten una actualización automática (útiles en momentos de ofensiva patronal contra los salarios) son "un mecanismo de indexación de la economía que hay que eliminar". Varios gobernadores, que las concedieron en el marco de las elecciones, también piden desconocerlas.

La burocracia es la pieza central

La clave de este plan antisalarial es el rol de la burocracia sindical, que se reconoce "parte del gobierno". Héctor Daer, el hombre fuerte de la CGT, es uno de los autores de la iniciativa. Su coequipero Carlos Acuña, alineado con Barrionuevo, llamó a los trabajadores a "aportar a que el país salga adelante". También se pronunciaron varios secretarios generales que no integran los órganos de las centrales, como el taxista Omar Viviani, y los de las dos CTA: Hugo Yasky y Hugo Godoy.

Antes que los bancarios otros sindicatos grandes, como Comercio y UTA, adaptaron sus cronogramas de negociación o revisión y, en las próximas horas, arranca la que, por peso gremial y político, es la más determinante: la paritaria nacional docente.

A los dichos favorables de Yasky y la aceptación de Roberto Baradel, del Suteba, de canjear la cláusula de actualización por la devolución de los días descontados por paros en la gestión de María Eugenia Vidal, se sumó Sonia Alesso, la secretaria general de Amsafe y de Ctera. Alesso fue más lejos que todos y cuestionó la utilidad de la cláusula gatillo.

El ministro de Educación Nicolás Trotta aseguró que las negociaciones "van a estar vinculadas a la realidad macroeconómica argentina".

Un camino tortuoso

La generalización de los aumentos fijos produce un "achataamiento de la pirámide salarial" que es rechazada por los que ganan por encima del promedio. Camioneros reclama un 33% adicional sin incrementos fijos. Otro gremio poderoso -Petroleros, conducido por Guillermo Pereyra- quiere saber nada con ceder los aumentos porcentuales. Ninguno de ellos, sin embargo, saca los pies del plato. Tanto los Moyano como Pereyra, lobista de las operadoras de Vaca Muerta, tienen línea directa con el ministro Claudio Moroni.

Por otro lado, hay patronales que consideran las sumas propuestas como "excesivas". Los dueños de estaciones de servicio y las cámaras de medicina privada notificaron que no abonarán el bono de fin de año y numerosas Pymes todavía adeudan los cinco mil pesos dispuestos por Macri; para pagar exigen créditos blan-

dos y exenciones impositivas.

Es decir, que el plan oficial tendrá que atravesar un camino tortuoso. A esto se suma la inflación, que el gobierno busca contener, sin éxito, con los Precios Cuidados. Según las consultoras privadas, en enero no se espera una baja significativa respecto al mes anterior; estaría cercana al 4%. Alberto Fernández habló de "actitudes irresponsables" y lanzó un ultimátum a los empresarios esgrimiendo la ley de Góndolas (que tiene media sanción). La respuesta patronal fue amenazar con una ola de remarcaciones y de despidos, además de la judicialización a nivel local y en tribunales internacionales.

El "pacto de precios y salarios" está lejos, en un verso para imponer la regimentación de las paritarias. Los trabajadores debemos defender las negociaciones libres y las cláusulas de actualización automática; los paritarios electos en asambleas y un plan de lucha para recuperar lo perdido y alcanzar un mínimo que cubra la canasta familiar y una jubilación del 82%.

A la manipulación de la burocracia, que transa con los gobiernos de turno, oponemos la autonomía de los sindicatos y un congreso de delegados electos por las bases, que debata y resuelva un plan integral basado en la ruptura con el FMI y el no pago de deuda usuraria y fraudulenta.

Miguel Bravetti

KIMBERLY CLARK

Continuamos la lucha en defensa de nuestros puestos de trabajo

Luego del violento desalojo a principios de diciembre que contó con la complicidad de la justicia, del gobierno macrista y el silencio del gobierno entrante, los trabajadores de Kimberly Clark de Bernal continuamos agrupados y realizando acciones de lucha. Fuimos recibidos por el gabinete municipal y movilizamos al Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, donde nos entrevistamos con asesores del ministro Augusto Costa. A mediados de enero, nuevamente, nos recibieron los funcionarios para comunicarnos que hubo una reunión con los directivos del grupo, donde les plantearon reincorporaciones en las otras plantas de la empresa, algo que obviamente la patronal rechazó.

Kimberly Clark adujo que tanto las plantas de Pilar como de San Luis están produciendo a bajos niveles y quedan lejos. También informaron que no venderán a otro privado del mismo rubro la planta de Bernal y que en las próximas semanas comenzarán los movimientos para desmantelar las líneas de producción. Kimberly planifica continuar con sus marcas en el país tercerizando la producción e importando desde Perú, uno de los lugares de Lati-



noamérica donde mejor les rinde el negocio, según indicaron. En el listado de Precios Cuidados solo figuran las marcas de pañales y toallas íntimas.

Nunca precisó Kimberly Clark qué piensa hacer con las seis hectáreas del predio, con los galpones, depósitos, talleres y oficinas donde los diseños cuentan con millonarias inversiones en seguridad e higiene industrial.

Con la prueba productiva días antes del desalojo los trabajadores demostramos que no nos quedamos solo en el reclamo. Elaboramos un proyecto de salida al conflicto, tenemos la capacidad de organización, calificación técnica y voluntad de defender nuestros puestos de trabajo. Consideramos que con una nueva planificación de los procesos, la planta podría funcionar como

proveedora del Estado con productos de consumo masivo para limpieza personal (tiene capacidad de elaborar 500 mil bolsones de rollos de cocina, papel higiénico, servilletas, pañuelos descartables, toallas industriales). Las líneas de producción empacadoras hace meses fueron actualizadas, y donde se elaboraban rollos industriales, toallas intercaladas y pañuelos, dichas líneas fueron instaladas hace menos de 2 años con tecnología de avanzada.

En estos días comenzaron a llegar las citaciones judiciales a los domicilios por las imputaciones de usurpación, con fechas para tomar declaración a fines de febrero o principios de marzo. Mientras a los trabajadores que defendemos nuestros puestos de trabajo nos tratan como delincuentes, patronales como Vicentín con 90 años en el país enfrenta una deuda que ronda los 1250 millones de dólares cuyo principal

acreedor es el Banco Nación; Molinos Minetti también presenta una deuda millonaria. Saquearon el país pero el Estado las cubre, les habilita el camino para cerrar y despedir.

El gremio papelerero, también cómplice de la patronal, perdió todo contacto. En el transcurso de estos meses seis fábricas cerraron, incluso pagando el 50 por ciento de las indemnizaciones en cuotas. La burocracia celeste sólo atinó a decretar el estado de alerta y movilización.

Los trabajadores resistimos el cierre y peleamos contra todo tipo de bloqueos políticos. Esta multinacional yanqui cerró una fuente laboral de 209 familias de la noche a la mañana. Los gobiernos nacional, provincial y municipal deben presionar para impedir que desmantelen la fábrica.

A pesar del duro escenario económico y político, continuaremos la lucha en defensa de nuestros puestos de trabajo.

Llamamos a todas las agrupaciones sindicales, políticas, y sociales a participar del acto donde vamos a informar con más precisión las novedades del conflicto y próximas iniciativas.

Walter Relañez

Un impeachment difícil, en un Estados Unidos polarizado

El juicio político contra Trump -por sus gestiones y extorsiones para que Ucrania avance judicialmente contra los negociados del hijo del candidato del Partido Demócrata (PD) Joe Biden, y por obstrucción al Congreso que investigaba esos menesteres, tuvo la semana pasada un arranque poco promisorio para sus impulsores demócratas: no lograron arriar ningún voto de los senadores del Partido Republicano (PR) que dominan la cámara (53 contra 47) a sus propuestas para sumar nuevos testigos clave y acceder a más documentos, lo que sugería que el proceso sería expreso.

Se espera que la fase de exposición termine el martes, tras lo cual habría una nueva votación por el tema, en la que se baraja que cuatro senadores republicanos se den vuelta, habilitando la comparecencia de testigos como el ex consejero de Seguridad Nacional John Bolton (conocedor de primera mano, según recientes filtraciones de un libro que está por publicar, de las presiones a Ucrania), y una prolongación del juicio.

Incluso en ese caso, se ve difícil que el PD logre sumar 20 votos más para llegar a los 67 necesarios para una condena. Los demócratas

no pueden haber descartado este escenario, y es probable que hayan decidido seguir adelante con la sola intención de dañar la imagen de Trump hacia las elecciones presidenciales de noviembre. Con todo, el proceso amenaza con concluir con los senadores del PR mancomunados con el rubio chillón y con el PD habiendo lanzado una ofensiva que terminaría aguada.

Crisis del régimen y polarización

Tanto la existencia del impeachment como su cuestionado destino muestran que la crisis del régimen político yanqui que le permitió llegar al poder a Trump no se ha cerrado, y podría profundizarse. Mientras el magnate viene sufriendo reveses en su tentativa de encumbrarse como un Bonaparte (desde los choques con la justicia al propio impulso de la inteligencia y el servicio diplomático al impeachment), no surge ningún presidenciable alternativo en el campo republicano y las figuras del establishment están lejos de tener garantizada una victoria en la interna demócrata.

El partido opositor se hizo con la mayoría en la Cámara Baja en las elecciones de 2018, pero debió sentir la corriente de anti-

patía hacia Hillary Clinton. Una encuesta reciente coloca por vez primera a Bernie Sanders, autoproclamado socialista, como favorito para las internas, con 27 contra 24% de Joe Biden. Sanders habría sumado adhesiones en estos días por condenar las provocaciones de Trump contra Irán, a tono con las marchas de repudio en todo Estados Unidos; y es quien más recaudó para la campaña, en su mayoría de trabajadores y sectores de bajos ingresos. Así, se configura un escenario de posible confrontación entre un candidato "izquierdista" y otro de ultraderecha, ambos outsiders del establishment.

Ello iría en línea con lo visto al inicio de la campaña de 2016, expresando la polarización política que atraviesa el país y recogen a diario los medios yanquis. Muestras de esto son el aumento de la violencia racial apañada por Trump, de un lado, y del otro el crecimiento de los Demócratas Socialistas de América, la principal organización de izquierda y un sostén clave en la candidatura de Sanders. Ello incluso cuando Sanders y DSA obstaculizan una franca polarización de clase, limitándose en sus choques con Trump a la acción parlamentaria

del PD y buscando encolumnar detrás de él a la militancia obrera y juvenil.

Los blefs del tuitero y el espectro de la recesión

Con la mira puesta en primer lugar en la reelección, Trump buscó mostrar iniciativa mediante el asesinato de Soleimani. Las protestas del PD ante el mismo no logran ocultar que su programa de fondo es por una política imperialista más sistemática y agresiva, representando a los sectores de la burguesía norteamericana que ven espantados las improvisaciones y recules de Trump en política exterior -desde el fracaso del golpe en Venezuela hasta el retroceso general en Medio Oriente, así como las amenazas fallidas contra China y Corea (que mostraron las divisiones dentro del capital yanqui).

En este escenario complejo, con espoleos desde arriba y desde la calle, Trump logró frenar la caída de popularidad apelando a la reactivación económica de los años iniciales de su mandato y a índices como el de desocupación, en su mínimo histórico (a costa de salarios y condiciones de trabajo paupérrimos). La burguesía industrial se ha visto afectada

por la guerra comercial pero se mantiene en favor de las barreras arancelarias de Trump -al igual que sus socios en la burocracia sindical-, sospechando que enfrentaría una caída peor sin ellas (*Financial Times*, 9/1).

Pero la economía del país viene desacelerando (la expansión del tercer trimestre de 2019 fue la más baja de esta gestión) y no son los pocos los que advierten el riesgo de una recesión (el fantasma que recorre el mundo). Los bonos con vencimiento a largo plazo pasaron a rendir mejor que los de corto plazo, expresando la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la economía. Hay quienes señalan, incluso, que el desempleo cayó porque los empresarios prefieren tomar trabajadores superflexibilizados que renovar capital fijo.

La crisis política y económica del país, combinada con los síntomas de radicalización en amplias franjas de los explotados, es un campo fértil para la organización revolucionaria, independiente de los partidos de la burguesía imperialista, contra las avanzadas fascistoideas, el belicismo y la explotación.

Tomás Eps

FRANCIA

Nuevas movilizaciones contra el gobierno



Los cuerpos de bomberos fueron reprimidos por la policía de Macron

En Francia, cada semana transcurre un nuevo episodio del enfrentamiento entre la población y el gobierno que lleva a preguntarse si el movimiento se agota o se renueva, cómo continúa, cuál es la política, las consignas, las modalidades de lucha de los militantes y activistas. El viernes pasado hubo una movilización masiva y decidida en las calles de París y de todas las ciudades; este miércoles 29 habrá una nueva jornada de lucha y todo indica que tendrá las mismas características.

La evolución de la crisis

Ayer martes, las calles de París conocieron nuevamente un hecho casi inédito: una manifestación de miles de bomberos reprimida por la policía. Se respiraba el gas lacrimógeno y en el mismo momento el ministro de Interior se comprometía a satisfacer algunas de las reivindicaciones. Había que evitar un nuevo estallido explosivo. El conflicto de los bomberos dura ya 6 meses, claro que sin abandono del servicio. La intersindical decidió interrumpir la huelga y mantener el conflicto, sobre todo porque no queda claro para nada cuál será la situación de los bomberos con la nueva ley de jubilaciones y si tendrán el mismo sistema que se le ha concedido a la policía.

De este episodio se puede retener que el gobierno está a la defen-

siva, que tiene que hacer concesiones, o la apariencia de concesiones, para evitar que la fisura se transforme en grieta, que la movilización toca a todos los sectores y quiebra los aparatos del Estado, que el enfrentamiento entre la población y el gobierno se generaliza, se profundiza, se "radicaliza", como se dice en Francia.

Así fue la manifestación del viernes 24: masiva, sin ser multitudinaria; con abogades, enfermeras, profesores. Enérgica, en todo el país, con una participación creciente de la juventud. En resumen, con una voluntad decidida de decenas de miles de activistas de continuar

y profundizar la lucha, a pesar del retroceso de la huelga general. Las direcciones sindicales burocráticas, responsables de este retroceso, repitieron su gesticulación y llamaron a una nueva jornada para el miércoles 29, esta vez sin hablar de la reconducción de la huelga, piden el retiro del proyecto y aceptan su participación en las instancias de "concertación".

Las direcciones sindicales le dan oxígeno al presidente Emmanuel Macron y al primer ministro Edouard Philippe que lo necesitan imperiosamente; cada día retroceden y se manifiesta la posibilidad de una crisis abierta.

El Consejo de Estado, máxima institución administrativa, destrozó el proyecto de jubilaciones; el macronismo se desgarró y se divide. Algunos diputados están abandonando el bloque oficialista, mayoritario en la Asamblea Nacional, y otros comienzan a pedir que el proyecto de jubilaciones sea retirado. El curso parlamentario va a ser un calvario que se conjugará con las movilizaciones y la derrota en las municipales.

¿Qué curso seguir?

Las direcciones sindicales aislaron la tremenda huelga ferroviaria y del subte parisino de 50 días y ahogaron su extensión. En la CGT, las federaciones y uniones departamentales de la oposición amagaron con acciones enérgicas y fueron poco más allá. Hay que seguir planteando la huelga, el retiro del proyecto y el fuera Macron.

El bloqueo de estudiantes y profesores a la reforma educativa y la huelga docente podrán tomar el relevo en la agitación callejera y huelguística. Se espera una participación consecuente en la jornada de hoy.

Con todo, hay que volver a la cuestión central, esto es la dificultad de los sectores y militantes combativos de proponer una política y una dirección alternativas, que confronten con las direcciones sindicales. Estas alternativas existen, y son importantes, en algunas ciudades, en algunas oportunidades, en algunos sindicatos de base; no tienen en cambio un carácter nacional y organizado. Se paga el precio de la dispersión y de la ausencia de un combate permanente y de amplitud por un partido y una actividad independiente de la clase obrera.

Hay que hacer todos los esfuerzos para realizar una reunión lo más amplia posible de las estructuras de base de los huelguistas -una actividad que se acerque lo más posible a un congreso del clasismo, a una deliberación política. Esta asamblea debe adoptar un programa de lucha, con el impulso de la huelga general, ninguna negociación, abajo el gobierno de Macron.

La crisis del gobierno nos da algo de tiempo para concretar una intervención independiente, nacional. La energía de la lucha y de los agrupamientos permite avanzar ya con este método: la huelga pertenece a los huelguistas y queremos una coordinación nacional y coordinaciones locales.

Roberto Gramar, París, miércoles 24 de enero